



Consejo de Seguridad

Distr. general
6 de julio de 2023
Español
Original: francés

Carta de fecha 15 de junio de 2023 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de Malí ante las Naciones Unidas

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de remitirle adjuntas las observaciones del Gobierno de la República de Malí sobre el informe trimestral del Secretario General sobre la situación en Malí relativo al período comprendido entre el 31 de marzo y el 1 de junio de 2023 (véase el anexo).

Le agradecería que tuviera a bien señalar la presente carta y su anexo a la atención de los miembros del Consejo de Seguridad y disponer su publicación como documento del Consejo.

(Firmado) Issa **Konfourou**
Embajador y
Representante Permanente



Anexo de la carta de fecha 15 de junio de 2023 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de Malí ante las Naciones Unidas

Memorando del Gobierno de la República de Malí relativo al informe trimestral del Secretario General sobre la situación en Malí correspondiente al período comprendido entre el 31 de marzo y el 1 de junio de 2023

Introducción

El Gobierno de la República de Malí ha examinado el informe trimestral del Secretario General sobre la situación en Malí correspondiente al período comprendido entre el 31 de marzo y el 1 de junio de 2023, presentado conforme a las disposiciones de la resolución 2640 (2022) del Consejo de Seguridad relativas al mandato de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA).

El Gobierno de la República de Malí recuerda que un requisito para la estabilidad duradera del país es que se realicen las reformas políticas e institucionales recomendadas en el marco de las consultas nacionales para la refundación.

Las reformas en curso, incluida la celebración, el 18 de junio de 2023, del referendo constitucional, que el Secretario General ha acogido con agrado, forman parte de la determinación del Gobierno y del pueblo maliense de refundar Malí y convertirlo en un país estable y próspero.

Al mismo tiempo, las operaciones en curso para mantener la seguridad de las personas y sus bienes y para estabilizar el territorio nacional que llevan a cabo de forma autónoma las Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses, en estricta conformidad con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, contribuirán a reforzar los beneficios que aporta el dividendo de la paz para la población.

Como observación general, el Gobierno señala que, en algunos lugares, el informe hace referencia a acontecimientos que tuvieron lugar fuera del período que abarca y que, en algunos casos, se habían mencionado en informes anteriores. Este enfoque pone en duda la pertinencia de tales recordatorios, sobre todo cuando tienden, en conjunto, a dar una descripción de situación de la seguridad más sombría que la realidad.

Esos interrogantes con respecto a las motivaciones se mantienen al observar cómo el informe insiste en las actividades de los grupos terroristas y, por el contrario, minimiza los esfuerzos de las Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses y de los progresos fiables y verificables realizados sobre el terreno en materia de lucha contra el terrorismo.

El informe requiere, concretamente, las siguientes observaciones por parte del Gobierno.

1. En el plano político

El Gobierno de la República de Malí acoge con beneplácito que el Secretario General haga hincapié en los importantes avances logrados en el ámbito de la reforma política, en particular la aprobación por consenso de la ley electoral y de seis leyes sobre reorganización territorial y administrativa, la introducción de la tarjeta nacional

de identidad biométrica y el establecimiento de la Autoridad Independiente de Gestión Electoral (AIGE), incluidas sus dependencias de coordinación regionales y locales y en las embajadas y consulados de Malí.

Teniendo en cuenta la realidad actual y las aspiraciones profundas del pueblo de Malí, el Gobierno de transición se puso manos a la obra para que el referendo sobre la nueva Constitución, previsto para el 18 de junio de 2023, se celebrara con éxito. El proceso para dar a conocer el proyecto de nueva constitución y la campaña festiva correspondiente se han desarrollado sin contratiempos, lo que augura una celebración pacífica y creíble del referendo.

Actualmente están en marcha los mecanismos para la organización de elecciones generales con vistas a la vuelta al orden constitucional en el plazo acordado.

2. Sobre la implementación del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí dimanante del Proceso de Argel

El Gobierno de la República de Malí comparte la preocupación del Secretario General en relación con el retraso del proceso de paz, que, en lo tocante al reciente bloqueo en los trabajos, se debe a la decisión unilateral de la Coordinadora de Movimientos de Azawad y de la Plataforma de suspender su participación en los mecanismos de seguimiento del Acuerdo. A pesar de esas dificultades, el Gobierno sigue empeñado en lograr la aplicación eficiente del Acuerdo, en particular con los Movimientos de la Inclusión, que también son signatarios del Acuerdo.

El compromiso del Gobierno también quedó demostrado con la visita a Kidal, el 14 de mayo de 2023, del coronel mayor Ismaël Wagué, Ministro de Reconciliación, Paz y Cohesión Nacional, responsable del seguimiento de la aplicación del Acuerdo, con el objetivo de reforzar la confianza entre las partes y facilitar la reanudación de los trabajos del Comité de Seguimiento del Acuerdo.

En paralelo, continuaron las consultas entre las partes malienses y el equipo de mediación internacional. Cabe mencionar también la reunión del Comité Directivo del proyecto para la reintegración de excombatientes, que permitió validar los documentos administrativos del Comité a fin de facilitar la integración socioeconómica de 900 mujeres de los grupos signatarios. En este sentido, el Gobierno acoge con beneplácito la puesta en marcha del proceso de reintegración de estas 900 mujeres el pasado 8 de junio en varias ciudades del norte del país, en el marco de la aplicación de las disposiciones del Acuerdo relativas al proceso de desarme, desmovilización y reintegración.

Malí concede gran importancia a la reconciliación, la indemnización y la justicia para las víctimas de las crisis, por lo que ha promulgado leyes a fin de crear la Autoridad de Gestión de las Reparaciones para las Víctimas de las Crisis en Malí.

A pesar del retraso en el proceso de desarme, desmovilización y reintegración y en el plan de acción 2022-2024, a día de hoy se registran 2.750 excombatientes ya reintegrados en las Fuerzas de Defensa y Seguridad Nacionales.

Asimismo, el Fondo de Desarrollo Sostenible siguió aplicándose a través de varias iniciativas para financiar proyectos y programas seleccionados. La estrategia formulada en el marco de la Zona de Desarrollo de las Regiones Septentrionales de Malí sirve de referencia para abordar las cuestiones relacionadas con el desarrollo de las regiones en cuestión.

3. En el plano de la seguridad

Durante el período que se examina, las Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses siguieron realizando actuaciones para proteger a las personas y sus bienes en todas las zonas afectadas, manteniendo sus posiciones, con resultados apreciables mediante patrullas a gran escala, la cobertura continua del territorio, la continuación de las misiones de escolta de vehículos de pasajeros y mercancías en las principales carreteras de Segú, Mopti, Duenza y Bandiagara, y la protección de las ferias semanales en las localidades de Diré, Ansongo, Bourem, Koro y Bankas. También se tomaron medidas para asegurar las fronteras.

Además de estas acciones, que incluyen operaciones periódicas rutinarias, operaciones selectivas y operaciones de vigilancia aérea con drones, las Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses han asegurado actividades agrícolas y de pastoreo en el centro del país y han participado en la distribución y protección del material electoral en el marco de la celebración del referendo, incluida la seguridad de los centros de exámenes de fin de curso, los grandes proyectos de desarrollo y los trabajos de rehabilitación de las infraestructuras destruidas por los grupos terroristas armados en la región de Segú.

Gracias a estos esfuerzos, se observa una disminución en los conflictos intercomunitarios y se ha reducido drásticamente la libertad de acción de los grupos terroristas armados, con decenas de terroristas neutralizados, santuarios terroristas destruidos y grandes cantidades de munición, equipos de comunicaciones y otros materiales confiscados. Entre ellos figuran 891 motocicletas nuevas destinadas a ser utilizadas por terroristas que fueron incautadas y 27 artefactos explosivos improvisados que fueron destruidos.

La intensificación de las operaciones continúa y ha permitido poner a disposición judicial a decenas de sospechosos de terrorismo. Estas operaciones también se saldaron con la desertión de un centenar de efectivos del Estado Islámico en el Gran Sáhara en el teatro de operaciones oriental, especialmente en Ansongo, y la rendición de ocho combatientes del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin) en el teatro de operaciones central, en Duenza y Boni.

En el marco de la aplicación de la Estrategia Nacional de Reforma del Sector de la Seguridad, ha proseguido el seguimiento de la aplicación del plan anual de 2023 mediante actividades destinadas a garantizar la apropiación de la Estrategia Nacional y de su plan de acción para 2022-2024. La estrategia ya ha logrado resultados alentadores en las regiones en lo que respecta a su aplicación en las regiones de Segú, Mopti, San, Bandiagara, Bougouni, Gao y Tombuctú.

En cuanto a la situación en el centro del país, el informe menciona, en los párrafos 14 a 16, un alto nivel de inseguridad en las regiones centrales, vinculado a los resultados del único atentado terrorista perpetrado el 22 de abril en la ciudad de Sevaré. El Gobierno precisa que el nivel de inseguridad debe evaluarse en función de su evolución con respecto al trimestre anterior, teniendo en cuenta los resultados con respecto al bando enemigo (número de terroristas neutralizados y armas y bienes confiscados).

El informe señala, en el párrafo 23, que el número de desplazados disminuyó un 8,9 % entre diciembre de 2022 y abril de 2023, y que un 55 % de ellos están en las regiones centrales y un 40 % en las septentrionales. Supuestamente, ello se debe al aumento de la inseguridad en las regiones de Kidal y Menaka y la relativa mejora de la seguridad en las regiones de Mopti y Segú. En opinión del Gobierno, ese análisis que figura en el informe exige coherencia en el razonamiento y sus consecuencias.

En efecto, es contradictorio, por una parte, deplorar “un alto nivel de inseguridad” y, por otra, reconocer “la relativa mejora de la seguridad [que] ha reducido las cifras”.

El Gobierno cuestiona qué valor tiene recordar, en el párrafo 24 del informe, el secuestro de un funcionario de la Organización Mundial de la Salud en enero de 2023, solo para afirmar inmediatamente después que el miembro del personal había sido liberado, sin más información, a pesar de que este suceso, que se produjo fuera del período que abarca el informe, ya había sido denunciado tres meses atrás.

En el párrafo 63, el Secretario General subraya que el inicio de la estrategia para la estabilización del centro señaló un momento importante en los esfuerzos por fomentar un enfoque amplio y con dirección política para abordar los desafíos específicos que afrontaba esa parte del país. Sin embargo, subraya la dificultad de traducir esta estrategia en acciones concretas.

A este respecto, el Gobierno recuerda que la estrategia va acompañada de un plan de acción para el período 2022-2024, que forma parte integrante de la estrategia y ha sido aprobado por el Gobierno.

Al mismo tiempo, el propio informe observa que la MINUSMA apoyó la realización de iniciativas concretas de estabilización en las regiones centrales, entre otras cosas mediante iniciativas de gestión de conflictos: i) creación de siete nuevos comités de reconciliación comunitaria y capacitación de sus miembros; ii) apoyo a la reconfiguración de comisiones de tierras; iii) apoyo a la celebración de vistas civiles y penales en la jurisdicción de Duenza.

Es importante subrayar que el plan de acción de estabilización prevé, entre otras cosas, la organización de audiencias por jurisdicción, bajo la dirección del Ministerio de Justicia, cuando la sede haya sido trasladada; la creación de equipos regionales de apoyo a la reconciliación y comités de reconciliación comunitaria en las nuevas regiones del centro (San, Bandiagara, Duenza); el fortalecimiento de las capacidades de los equipos regionales de apoyo a la reconciliación y los comités de reconciliación comunitaria; y el apoyo a las iniciativas de diálogo comunitario a través de las comisiones de tierras, los equipos regionales de apoyo a la reconciliación y los comités de reconciliación comunitaria, bajo la dirección del Ministerio de Reconciliación Nacional.

Además, el Gobierno sigue abierto a la flexibilidad del plan de acción para tener mejor en cuenta las necesidades específicas de las regiones centrales, en caso necesario, y de conformidad con el Decreto núm. 2016-0056/P-RM, de 15 de febrero de 2016, por el que se establecen los procedimientos de elaboración, aprobación y aplicación de los documentos de política nacional.

Unos 50 miembros de departamentos ministeriales e instituciones clave han sido designados para formar el Comité Nacional de Coordinación encargado de elaborar el primer informe anual sobre la aplicación de la Estrategia de Estabilización. Los términos de referencia para el informe de seguimiento de la Estrategia de Estabilización, incluido un formato para la presentación de informes, están disponibles.

Por tanto, queda confirmado que el Gobierno sigue aplicando la Estrategia de Estabilización. Las autoridades siguen abiertas a las asociaciones para reforzar los esfuerzos en curso del Gobierno, que ya han dado resultados convincentes, especialmente en las regiones de Mopti, San y Bandiagara.

En cuanto al restablecimiento de la autoridad del Estado, el Gobierno de Malí señala que, a diferencia de los informes anteriores, el informe no proporciona cifras sobre la presencia del Estado (subprefectos, prefectos y gobernadores) en el centro

del país que permitan evaluar los resultados de los esfuerzos del Gobierno para restablecer la autoridad del Estado en todo el país.

A ese respecto, se observa que la mejora de la situación de la seguridad en las zonas afectadas ha facilitado el regreso de los representantes del Estado a todo el país. En efecto, durante el período que se examina, todos los gobernadores regionales, los miembros de sus gabinetes y los prefectos estuvieron presentes en sus lugares de destino, con lo que se contribuyó a la prestación de servicios sociales básicos a la población mediante la coordinación, orientación y supervisión de los servicios descentralizados y las autoridades locales.

Además, más de la mitad de los subprefectos también están presentes en sus respectivas localidades y siguen ocupándose de la gestión cotidiana de sus distritos administrativos.

4. Sobre la situación de los derechos humanos

Según el informe, la MINUSMA documentó y verificó 132 violaciones y abusos de los derechos humanos, que incluyen muertes (89), lesiones (31) y secuestros o desapariciones forzadas (12). El informe afirma además que los principales perpetradores de las violaciones contra poblaciones civiles siguieron siendo los grupos extremistas, seguidos de los grupos de autodefensa, las milicias armadas y los grupos armados signatarios.

En comparación con el período anterior, se observa un descenso en el número de casos de violaciones de los derechos humanos y cabe destacar los efectos positivos de las operaciones ofensivas y preventivas de las Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses, que han reducido considerablemente las acciones delictivas de estos grupos.

En cuanto a los casos atribuidos en el informe a las Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses, el Gobierno lamenta de nuevo que el Secretario General no facilite ningún detalle sobre los lugares, las fechas y las presuntas víctimas de estos incidentes, y que el informe se limite a afirmar que “se documentaron algunas violaciones (...) durante las operaciones realizadas por las Fuerzas Armadas Malienses”. La ligereza de ese planteamiento contrasta de forma llamativa con la gravedad de las acusaciones formuladas contra las fuerzas malienses.

La objetividad elemental en la materia habría exigido, como mínimo, precisar en mayor medida las acusaciones formuladas contra las Fuerzas Malienses, a fin de dar a las autoridades competentes la oportunidad de llevar a cabo las investigaciones necesarias, de conformidad con los compromisos del Gobierno, reiterados en numerosas ocasiones, de dar el seguimiento necesario a cualquier acusación creíble y verificable que se ponga en su conocimiento.

El Gobierno lamenta profundamente este proceder, que no sigue las precauciones formales y sustanciales indispensables para la credibilidad de unas acusaciones graves. Debido a su carácter reiterativo y a la omisión de las pruebas indispensables para examinar de manera objetiva los hechos alegados, se plantean interrogantes sobre la motivación real de estas acusaciones, que, en esta fase, carecen de fundamento alguno.

En lo que respecta al caso concreto de Moura mencionado en el informe, el Gobierno de la República de Malí recuerda que, a partir de información fiable y precisa que indicaba la presencia en la feria de Moura de importantes jefes terroristas con el fin de recaudar el azaque y organizar y planificar atentados a gran escala contra nuestras fuerzas y las aldeas contrarias a ellos, las Fuerzas de Defensa y de Seguridad

Malienses decidieron llevar a cabo una operación aérea y terrestre a la altura de esa amenaza para poner fin al sufrimiento de nuestro pueblo. Las primeras unidades desplegadas por medios aéreos en esa operación fueron objeto de fuego enemigo, lo que confirmó la presencia terrorista; lo mismo sucedió con los refuerzos llamados en su ayuda. Se produjeron enfrentamientos en la ciudad de Moura y sus alrededores, que se saldaron con la neutralización de 203 combatientes terroristas, la detención de 51 presuntos terroristas, la incautación de gran cantidad de armas y municiones y la destrucción de más de 200 motocicletas. Lamentablemente, ocho de nuestros valientes soldados también murieron en combate durante esta operación, que liberó a la población del yugo de los terroristas.

El Gobierno rechaza enérgicamente en su totalidad las conclusiones del informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se basa en relatos ficticios y tendenciosos.

Según el comunicado núm. 026 de 1 de abril de 2022 del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, 203 combatientes de grupos terroristas armados resultaron muertos y otros 51 detenidos y transferidos a la Dependencia Judicial Especializada de Lucha contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada Transnacional.

Una señal del carácter como mínimo tendencioso del informe es el hecho de que un gran número de agentes, principalmente personas que vivieron los sucesos de Moura y organizaciones de la sociedad civil, y por tanto totalmente independientes del Gobierno, negaron las acusaciones formuladas. En efecto, numerosos habitantes de Moura, entre ellos mujeres, se desplazaron espontáneamente a Bamako para desmentir el contenido de ese informe (véase el informativo de la Oficina de Radiotelevisión de Malí de las 20.00 horas del 4 de junio de 2023, 20.00 horas). Las declaraciones realizadas durante la conferencia que celebraron están documentadas.

Lo mismo cabe decir de las declaraciones del Presidente de la Asociación Maliense de Defensa de los Derechos Humanos, que denunció enérgicamente la metodología y las conclusiones de la investigación. Por otra parte, el Presidente de la Asociación Tabital Pulaaku, Sr. Abou Sow, confirmó en la audiencia que le concedió el Primer Ministro el 6 de abril de 2022 que “se han vertido acusaciones contra nuestras Fuerzas de Defensa y Seguridad que deseo desmentir. Son falsas e infundadas. Se ha dicho que las Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses violaron a mujeres. No, eso es rotundamente falso, no ha habido ningún caso de mujeres violadas. Eso es lo que queremos decir, y es posible que quienes lo afirman tengan sus propias razones. Lo decimos alto y claro, ninguna mujer ha sido violada ni violentada” (véase el informativo de la Oficina de Radiotelevisión de Malí del 6 de abril de 2022, 20.00 horas). Sorprendentemente, estas firmes declaraciones se omiten en el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que se supone imparcial, neutral y objetivo.

El Gobierno desea subrayar que este tipo de posturas por parte de los órganos de las Naciones Unidas socavan la credibilidad de nuestra organización común y, lamentablemente, contribuyen a crear y mantener un clima de desconfianza, e incluso de suspensión, sobre la instrumentalización de la cuestión de los derechos humanos por parte de asociados con agendas inconfesables en Malí e intereses estratégicos muy alejados, tanto geográficamente como en el fondo, de la situación en Malí.

El Gobierno de Malí reitera su llamamiento para que las cuestiones de derechos humanos se traten con imparcialidad y sabe que puede contar con la profesionalidad de muchos funcionarios de las Naciones Unidas para evitar situaciones tan lamentables y perjudiciales para la confianza de los Estados Miembros en una organización cuyo principal objetivo es ayudar a sus miembros a superar las dificultades a las que se enfrentan.

No obstante, y a pesar de su evidente parcialidad, las alegaciones contenidas en el llamado informe “de Moura” fueron examinadas por una misión de investigación dirigida por el Fiscal del Tribunal Militar de Bamako, en coordinación con el Tribunal Militar de Mopti. Esta misión, que visitó el lugar, incluía también a un oficial médico judicial, un equipo de la policía técnica y científica e investigadores del servicio de investigación judicial de la Gendarmería Nacional. Las investigaciones siguen en curso.

A la espera del resultado de estas investigaciones, se debe invitar a todos los asociados a que se abstengan de extraer conclusiones precipitadas destinadas a manipular y desacreditar a las Fuerzas Malienses, cuya única vocación es proteger al pueblo maliense. En el marco de la lucha contra la impunidad, se ha elaborado un mapa de denuncias de abusos formuladas contra las Fuerzas Malienses desde 2018 hasta la actualidad.

El Gobierno de Malí seguirá trabajando por la protección y promoción de los derechos humanos de acuerdo con los valores humanistas ancestrales contenidos en la Carta de Kurukan Fuga de 1236, al tiempo que reitera su firme oposición a cualquier intento de explotar la cuestión con fines políticos.

El Gobierno de Malí reitera su compromiso en la lucha contra la impunidad. En todos los casos documentados se ha abierto sistemáticamente una investigación. Se han dictado autos de procesamiento para los casos verificados y hay investigaciones judiciales en curso en diversas salas de instrucción de los tribunales militares.

Además, el tribunal militar de Bamako celebra audiencias correccionales y penales. También se ha reforzado el dispositivo de lucha contra la impunidad, con la apertura de procedimientos judiciales para todos los delitos cometidos por militares en el teatro de operaciones. Cabe señalar que todas las patrullas llevadas a cabo por las Fuerzas Malienses en Sevaré y Mopti se realizaron conjuntamente con la MINUSMA.

El Gobierno prosigue su política de refuerzo del marco jurídico e institucional. En ese aspecto, después de la creación, el 1 de febrero, de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, que, entre otras cosas, se encarga de coordinar las políticas públicas que guardan relación con los derechos humanos y de garantizar que se apliquen medidas para prevenir violaciones y abusos de los derechos humanos, se han adoptado muchas medidas para hacer operativa la Dirección Nacional, en el plano logístico, técnico e institucional, con el próximo nombramiento del primer director nacional de esa entidad.

En el frente humanitario, asumiendo toda su responsabilidad para aliviar a las poblaciones afectadas, el Gobierno de Malí, durante el período examinado, asistió a 94.523 personas en la región de Bandiagara, a 60.300 en Tombuctú, a 120.389 en Gao y a 102.230 en Mopti.

El Gobierno también está convencido de que la mejora de la situación humanitaria está vinculada a la estabilización del territorio. Las operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses han permitido reabrir cientos de escuelas cerradas por motivos de inseguridad en las regiones del norte y el centro del país.

A finales de abril de 2023, los servicios competentes habían registrado el retorno voluntario de 776.315 desplazados y 85.146 refugiados malienses a sus lugares de origen, así como la reanudación de las actividades agrícolas, gracias a los esfuerzos del Gobierno apoyado por sus asociados.

Sobre la cuestión de los retos operativos de la MINUSMA, en particular los casos considerados por el Secretario General como “restricciones” a los movimientos,

el Gobierno invita a la MINUSMA a respetar los principios acordados entre las partes en el marco del procedimiento de solicitud de sobrevuelos de aeronaves y aparatos volantes de la Misión.

En cuanto a las perspectivas del mandato de la MINUSMA, el Gobierno de Malí toma nota de las recomendaciones del Secretario General relativas a su renovación por un año más, el mantenimiento de sus efectivos uniformados autorizados en su nivel actual y la racionalización de las tareas de la MINUSMA en torno a la aplicación del Acuerdo y la transición política.

El Gobierno está de acuerdo con el análisis del Secretario General de que el *statu quo* no es sostenible, pero sigue reiterando su oposición a las tres opciones que se plantean en el informe sobre el examen interno de la MINUSMA. El Gobierno hace notar, por otro lado, los cambios que se han producido en el mandato de la MINUSMA, que se desplegó en 2013 con el fin de apoyar a las autoridades malienses para estabilizar la situación de la seguridad, eliminar las amenazas y tomar medidas activamente para impedir el regreso de elementos armados a esas zonas. Después de “casi diez años”, como lo recuerda el Secretario General, es necesario hacer balance de esta presencia.

Conclusión

El Gobierno de Malí sigue plenamente comprometido a trabajar con todos sus asociados, incluidas las Naciones Unidas, para solucionar la crisis en el país de forma duradera. En este sentido, la aplicación diligente y continuada del Acuerdo de Paz y la lucha contra el terrorismo por parte de las Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses siguen siendo prioridades para el Gobierno de Malí. Los importantes progresos realizados en el marco político de la Transición ilustran también el compromiso de todas las autoridades, bajo la dirección del Presidente de la Transición y Jefe del Estado, Coronel Assimi Goïta, para lograr un retorno pacífico y seguro al orden constitucional.

Por último, el Gobierno de Malí sigue abierto a continuar el diálogo con las Naciones Unidas y con todos los asociados que respeten los principios clave que guían la acción pública en Malí.

Kuluba, 14 de junio de 2023